

# I. La Violencia: la cara amarga de la transición en Venezuela

Luis Pedro España N.<sup>1</sup>

Dos fechas se han hecho episodios obligados del reflexionar socio-político contemporáneo en Venezuela. El 27 de Febrero de 1989 y el 4 de Febrero de 1992, han sido hitos que entre la sorpresa y la fatalidad echaron por tierra nuestras visiones más o menos pesimistas de lo que podría ser el futuro del país.

Pasado el *sueño petrolero-rentista*, nuestro despertar cada vez parece ser más turbulento y ello quizás porque en los últimos 25 años la población venezolana no había conocido lo que significaba la suspensión de las garantías, el estado de excepción y el rompimiento de la cotidianidad, junto al estado de zozobra y tensión que ocasionan las explosiones de violencia explícita y la inestabilidad política.

No obstante a pesar de que la violencia en el país es cada vez más un dato presente a nivel no sólo del incremento de la delincuencia, sino que también ha alcanzado la forma de violencia institucional expresada en las organizaciones políticas y sociales; es poco lo que se ha analizado sobre la violencia en Venezuela y sobre lo que es posible esperar de ella en los próximos años.

A pesar de lo importante que es para una sociedad conocer su capacidad de "destruir" a sus miembros como consecuencia de sus propios conflictos, de su proceso de *recreación*, o simplemente del uso de la violencia como instrumento para lograr objetivos sociales; los rasgos cada vez más violentos que está adquiriendo nuestra realidad de transición económica y política parecen no ocupar la agenda de nuestros temas públicos.

<sup>1</sup> El presente artículo es una actualización de la ponencia presentada por el autor al Foro Internacional sobre Violencia y Cultura organizado por la Universidad de Naciones Unidas celebrado en Lima-Perú en Octubre de 1991.

En atención a lo anterior el trabajo que a continuación presentamos pretende dar cuenta del fenómeno de la violencia en Venezuela, visto como realidad histórica del país y como signo presente de los cambios que se están operando. Para tal fin partiremos de nuestro violento proceso de conformación del Estado nacional, la aparente suspensión de la violencia pública en los años de la democracia, para luego analizar la real y potencial magnitud de violencia en la sociedad venezolana de hoy.

### *La Violencia que cuesta ver*

Desde la instauración de sistema democrático en Venezuela y más recientemente con el "boom petrolero" de los años setenta, el país no confrontaba problemas económicos mayores gracias a su riqueza energética y además no padecía de conflictos de índole lingüística, religiosa o racial tan dados a resolverse por la vía de la violencia. Esto nos permitió transitar un período de cierta paz relativa que contrastaba con la violencia política del s XIX venezolano.

Ya desde mediados de los años cuarenta esa imagen de Venezuela nos era familiar, y no sin fundamento. Mientras que para 1939 Venezuela tenía un ingreso per cápita 26% superior al de América Latina, diez años después el país estaba un 70% por encima del promedio de ingresos y a principio de los ochenta más de un 80%<sup>2</sup>. De esta forma ya para 1976 Venezuela tenía el mayor ingreso por habitante de Latinoamérica, disfrutaba de un sistema político democrático consolidado, presentaba índices de huelgas y paros obreros que serían la envidia de cualquier país desarrollado, y sus relaciones internacionales se mantenían en el contexto de la cooperación y el entendimiento.

Si bien es cierto que internamente el país aún se encontraba muy lejos de superar las rémoras del subdesarrollo —caracterizada por la pobreza y la extrema desigualdad social—, los indicadores sociales del país se mostraban como uno de los mejores en comparación con otros países de igual o mayor nivel de desarrollo económico dentro de la región. Así, a mediados de los años setenta Venezuela ocupaba el 2do. lugar con mayor porcentaje de población urbana de América Latina, el 3ero. con menor número de habitantes por médico, el 5to. con mayor número de camas de hospital por habitantes, el 7mo. en porcentaje de población analfabeta y mayor esperanza de vida al nacer, y el 10mo. en consumo de calorías y proteínas<sup>3</sup>.

Aunque en el contexto Latinoamericano Venezuela mostraba logros nada despreciables, la fuerte entrada de ingresos por concepto del petróleo reclamaba una mejor condición de vida de los niveles hasta entonces alcanzados por la población. Sin embargo, el discurso político dominante, la conciencia colectiva y la propia experiencia

<sup>2</sup> CEPAL, *Series Históricas del Crecimiento de América Latina*, (Cuadernos Estadísticos de la CEPAL), Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1978.

<sup>3</sup> Banco Mundial, *Informe sobre el Desarrollo Mundial*, Washington, D.C., 1980.

generacional de movilidad social ascendente, parecía indicar que sólo era cuestión de tiempo para que el crecimiento socio-económico alcanzara a todos los sectores del país. Tales expectativas, razonablemente sostenidas por la gran mayoría de los sectores del país, junto a un sistema político que garantizaba la inclusión de los principales intereses sociales, fue lo que permitió que transcurrieran más de 30 años de paz manifiesta bajo un régimen democrático.

Aún bajo el deslumbramiento de lo que habían significado más de 12 mil millones de dólares de ingreso petrolero en promedio anual desde 1973 hasta 1981 para una población no mayor a los 14 millones de habitantes; la crisis de los años ochenta dislocó buena parte de las bases de sustentación que habían hecho de Venezuela un país alejado de muchos de los conflictos que atravesaban otros países del continente. En todos los ámbitos del país, fuera económico —con la crisis de la deuda y la caída del ingreso petrolero—, político —al deteriorarse las vías institucionales para gestionar las disputas de interés—, o social —con la abrupta caída en los niveles de vida—; las expectativas de progreso y bienestar, alimentadas desde los primeros años de la democracia, progresivamente fueron dando paso al desconcierto y la incertidumbre.

A partir de entonces la sociedad venezolana se ha visto sometida a importantes cambios, reajustes y reformulaciones de lo que fue el proyecto político democrático inicial. En un intento por adaptarse a las necesidades de un país muy distinto al que conoció la aparición del petróleo en el primer tercio de este siglo, han emergido conflictos y tensiones sociales, que no pocas veces terminan por vías no institucionalizadas, cuya última expresión fue el intento de golpe de Estado por parte de una importante fracción de las Fuerzas Armadas.

Este proceso, que quizás aún se encuentra en sus comienzos y cuya resolución final resulta difícil de prever, muestra entre una de sus muchas características la aparición cada vez más cotidiana de la violencia, y no sólo aquella que afecta personalmente en una relación micro-social de víctima-victimario propio del incremento delictivo, sino incluso la violencia política y social.

En una concepción algo más amplia de lo que normalmente entendemos por violencia, buena parte de los cambios que se han registrado en Venezuela durante los años ochenta pueden considerarse como situaciones de violencia indirecta o potenciales desencadenadoras de violencia directa. Si bien el deterioro en las condiciones de vida, el desgaste de las instituciones democráticas y las *restricciones impuestas* por la llamada crisis "*al potencial de realización de los individuos y las colectividades*"<sup>4</sup>, supondría un concepto de violencia demasiado global; no obstante, no es menos cierto que muchos de los ítems que constituyen dichas situaciones pueden desembocar en eventos claramente reconocidos como violentos.

<sup>4</sup> Tal concepción de Violencia se encuentra en Johan Galtung, "Violencia, paz e investigación sobre la paz", *Sobre la Paz*, Ed. Fontamara, Barcelona, 1985.

Golpes de Estados, revueltas y saqueos, represión de manifestaciones, coacción a la libertad de expresión y abusos de poder, por mencionar algunas formas más o menos claras de violencia en las sociedades contemporáneas ¿no son el fruto de aquello que normalmente no reconocemos como violencia?

De ser así, de aceptar que existe una conexión —no mecánica— entre los deterioros relativos de las variables socio-económicas y políticas, y la aparición o aumento de violencia directa —según ciertas condiciones que a continuación desarrollaremos—, esto lleva a reconocer que las transformaciones y ajustes que están ocurriendo en Venezuela poseen un monto de violencia asociada susceptible de ser explicada estructuralmente, y que deben tenerse presentes si de lo que se trata es de minimizar la violencia manifiesta aún en las condiciones actuales del país.

### *El "maná" del subsuelo y la promesa modernizadora*

En Venezuela la creación de un orden republicano que sustituyera al sistema colonial implicó el uso de la violencia como instrumento para resolver las diferencias durante buena parte del s.XIX. La lógica de dicho proceso se conoce comúnmente con el nombre de *caudillismo*, y más allá de la "Leyenda Negra" que nuestra *historia oficial* haya construido, ciertamente la inexistencia de un Estado Nacional capaz de monopolizar la violencia legítima hizo de las revoluciones y guerras civiles la práctica de sucesión política.

Durante el período del llamado Castro-Gomecismo (1898-1935) termina el caudillismo como orden político parcelado que supuso el alto grado de violencia y descomposición social del s.XIX, dándose inicio al proceso político que permitió el diseño e implantación del proyecto político que produjo el tránsito a la modernidad con saldos de violencia muy bajos.

Cerrado el círculo caudillista comienza la tarea "de civilizar al país". Esto no es más que la transformación evolutiva de la sociedad "atrasada" y de economía de subsistencia de entonces, por otra moderna, de economía fabril, capaz de transformar el medio físico y cambiar las formas de pensar, actuar y decir de los individuos por medio de la educación.

Con la muerte de J.V. Gómez se abre el debate político con la presencia de gobiernos cívico-militares más tolerantes de lo que había sido la férrea conducción de la dictadura, y ello permite la conformación de lo que será el proyecto nacional de modernización que hasta ahora ha estado vigente.

Sin entrar a considerar las razones que llevaron a la promulgación de tal proyecto, una característica crucial de dicho proyecto será el papel dado al Estado como conductor

de la modernización. Dos condiciones justificaban la decisión, y explican por qué otra vía posible de tránsito hubiese sido, al menos no tan pacífica de lo que fue en realidad.

La primera fue que una vez conformado el Estado nacional éste se convirtió en el espacio social mejor organizado de la sociedad, y por tanto, único capaz desde donde podrían operarse los cambios. Esto era así porque el resto —lo que actualmente llamaríamos la sociedad civil— no tenía ningún tipo de organicidad, no existían fuerzas sociales organizadas o siquiera conformadas; a lo más unas cuantas élites organizadas en incipientes partidos políticos que disputaban el poder de las élites gubernamentales. La segunda estaba representada por la particularidad del Estado de ser el depositario inicial del importante ingreso petrolero.

En estos años el petróleo ya representa una de las principales fuentes de recurso para la nación, dado que la infraestructura productiva, desarrollada desde las primeras concesiones de los años diez y veinte, ya se encontraba plenamente instalada y en operación. De esta forma, el petróleo era ya para entonces una alternativa para financiar el desarrollo.

Precisamente la idea de modernizar al país, desde el Estado, fue lo que hizo del petróleo la fuente privilegiada de ingresos para Venezuela. Con la llegada de las compañías transnacionales, a principios de este siglo, el régimen de concesiones fue variando conforme las élites gobernantes diseñaban un modo de inserción en una actividad. Dado que las condiciones del país de entonces no permitían una inserción productiva, dadas las escasas posibilidades de participar como productor directo o como consumidor, la vía escogida fue la rentista; es decir, el reclamo del propietario de los yacimientos —el Estado— por el cobro de una renta del suelo que debía cancelar el arrendatario de los yacimientos —las compañías—. Dicha renta petrolera en la medida en que fue posible, según las condiciones de cada momento histórico, tendió a maximizarse, proceso que terminó con la nacionalización de la industria por parte del rentista.

Los ingresos petroleros van a servir para cumplir una doble función, que es crucial para entender la pacificación, tras la muerte de Gómez, e incluso para la creación del propio orden democrático. Por un lado, ser la fuente de acumulación de capital para proveer la inversión interna privada y pública, y por otro, distribuir dicho ingreso en la mejora de las condiciones de vida de la población; transformando el medio físico, creando la infraestructura para el proceso de urbanización del país, mejorando las condiciones sanitarias, educativas y alimentarias de la población, entre otros.

Esto dio por resultado que en menos de cinco décadas el país cambiara abruptamente a un costo social y con unos niveles de violencia abierta infinitamente menores a los que suelen acompañar procesos de cambio social tan rápidos.

## *Sin embargo, no todo es petróleo*

Podría decirse que el cambio modernizador ocurrido en Venezuela de 1920 a 1976 se apoyó en el petróleo y en la inserción rentista del país a esa actividad. La magnitud de estos cambios habla por sí misma de esa transformación exitosa, y que independientemente de los desajustes o problemas que evidentemente introdujo, ha sido el logro más importante del país.

En ese período Venezuela dejó de ser un país mayoritariamente rural para alcanzar hasta un 82% de población urbana, su crecimiento económico fue de 3,9% anual mientras que el de las economías industrializadas fue de 2,1%, el salario real creció en 3,8% al año, lo que para Latinoamérica fue de 2,1% y en los países desarrollados de 3,1%; virtualmente desapareció el analfabetismo, los niveles de escolaridad aumentaron, la matrícula en educación básica logró incorporar a más del 80% de los escolares, mejoraron todos los servicios sanitarios y junto a él las enfermedades endémicas que diezmaban a la población<sup>5</sup>.

Este cambio no le costó al país "*ni un solo muerto*", por el contrario fue mucho lo que contribuyó a que el venezolano viviera más, se alimentara y vistiera mejor, se educara y alcanzara derechos como individuo y ciudadano. Aunque esto último, como se entenderá, no necesariamente se vincula al petróleo directamente.

Si bien la evolución o modernización política iba a la zaga de los rápidos avances socio-económicos, puede decirse que el paso del Estado despótico del gomecismo al democrático que conoció el esplendor del ingreso petrolero, también fue conquistado con dosis de violencia abierta mucho menores al de otros países del continente.

Cierto es que de 1936 a 1958, la vida política venezolana transitó por múltiples escollos hasta alcanzar la consolidación de un régimen democrático. Sistema éste, en el cual el ejercicio de la violencia política se reduce a su mínima expresión, comparado con otros sistemas de gobierno.

Sin embargo, ese proceso de transición del autoritarismo a la democracia, no supuso una prolongada guerra civil o la imposición de regímenes de Seguridad Nacional previos a la rebelión democrática. Si bien Venezuela padeció de la privación de libertades políticas, la transición fue producto de acuerdos concertados, negociaciones entre intereses, y no a través de enfrentamientos armados semejantes a los del siglo XIX.

La historia política de la democracia en Venezuela avanza con la oposición enteramente civil a los gobiernos cívico-militares que van de 1936 a 1945. En esos años,

<sup>5</sup> Asdrúbal Baptista, "Más allá del optimismo y del pesimismo: Las transformaciones fundamentales del país", pp.20-41. *El caso Venezuela. Una ilusión de armonía*, Ed. IESA, Caracas, 1984.

abierto el campo para la lucha política pacífica, el liderazgo civil se encuentra con las masas y ensaya formas de organización con los obreros, los estudiantes, los intelectuales y los empresarios. Salvo algunos cierres políticos "profilácticos" que introduce el gobierno de López Contreras (1936-1941) y que obligan al exilio de algunos dirigentes, no va a ser sino hasta 1945 cuando un grupo de militares de mediana graduación se alfan a la organización política más importante del país "Acción Democrática" y dan el "Golpe de Palacio de 1945" que dio inicio a la primera experiencia democrática de 1945 a 1948, y que terminó con el gobierno de Pérez Jiménez.

Durante el gobierno autoritario de las Fuerzas Armadas, por medio de la presidencia del Gral. Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), la represión contra los sectores políticos opositores fue selectiva y dirigida a desarticular a las organizaciones políticas democráticas. Si bien, la resistencia al régimen padeció de la persecución del gobierno militar, cuando éste se hizo personalista y fue recurriendo cada vez más al terror y a la violencia generalizada para mantenerse en el poder; sus apoyos políticos claves —sectores económicos, la iglesia y las propias Fuerzas Armadas— se retiraron, dando paso a los acuerdos y pactos que hoy están en crisis en la democracia venezolana <sup>6</sup>.

Conforme transcurrió la accidentada evolución hacia un régimen democrático, las transformaciones socio-económicas siguieron su curso. Si consideramos que las políticas económicas y sociales dirigidas a modernizar al país y mejorar las condiciones de vida de la población, contribuían a establecer entre los venezolanos relaciones sociales más propicias para la realización de los individuos; desde el punto de vista estrictamente socio-económico no habría razón para suponer grandes diferencias entre las acciones de los gobiernos no-democráticos de los que lo fueron a partir de 1958. De allí que la reivindicación democrática significó básicamente un cambio de orden político, antes que un sustancial cambio de dirección en las políticas de desarrollo.

Sin embargo, no hay duda que la introducción de la democracia como sistema político estable en Venezuela fue un paso significativo en la consecución de la paz social del país. Esta significó la introducción de medios pacíficos que normaban la sucesión en el poder y la resolución no violenta de los conflictos. Hecho éste que en justicia no debe serle atribuido al petróleo.

### *La Democracia Feliz*

La democracia como sistema político —que se caracteriza por la creación de un conjunto de procedimientos e instituciones cuyo fin último es resolver los conflictos, las diferencias o el disenso por medios pacíficos—, puede normativamente señalarse como el ordenamiento político que garantiza el menor nivel de violencia en las relaciones

<sup>6</sup> Andrés Stambouli, *Crisis Política. Venezuela 1945-1958*, Caracas, 1980.

sociales donde se inscribe. Así la democracia y sus distintas graduaciones, como fases progresivas del proceso democratizador, es fin y medio a la vez, de la paz social.

La conformación de un sistema democrático a partir de 1958, donde se le garantizaban derechos políticos a los ciudadanos, un sistema de libertades para el ejercicio de esos derechos y un régimen electoral para la sucesión en el poder político, se alcanzó gracias a la concertación de los principales grupos de poder del país<sup>7</sup>.

De la "Democracia Acordada" sólo estuvieron excluidas las corrientes más radicales de izquierda. El propio sistema de acuerdos mantuvo al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a otras facciones radicales, desmembradas de los principales partidos políticos fuera de la alianza, con el fin de asegurar la presencia de sectores conservadores que se inhibirían de participar si "los comunistas" no eran tomados como "enemigos" por parte del nuevo sistema.

Esto llevó a que los grupos de izquierda pasaran directamente a la conspiración y a la lucha armada, lo que desató tempranamente la violencia política en la democracia. El movimiento guerrillero, fórmula de participación política escogida por los grupos de izquierda dada "la expulsión" de éstos del marco democrático, supuso al menos 5 años donde la violencia política abierta fue importante en el país. Esta terminó con la derrota militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en 1962, y su posterior derrota política en 1963 cuando el llamado de la guerrilla a la abstención electoral hizo que la población acudiera masivamente a las urnas de votación en ese año.

La superación oficial de la lucha armada en Venezuela, no se alcanzaría sino hasta 1968, con la política de pacificación de Rafael Caldera (1968-1973) y la re inserción de las agrupaciones políticas de izquierda a la lucha política legal, por medio de partidos políticos de izquierda que participaron en las elecciones presidenciales de 1973.

La lucha armada no pudo escindir el pacto democrático, ni convocar a las masas a un proyecto distinto al acordado por las fuerzas pactantes. De esta forma, el triunfo de la democracia está íntimamente relacionada al respeto por los acuerdos políticos que la sustentaron y al establecimiento de compromisos mínimos comunes que serían atendidos por cualquiera de los partidos pactantes que llegara al poder del Estado por la vía electoral.

Ese compromiso de acción gubernamental se basaba en dos lineamientos que terminarían por ser supuestos o puntos de partida para los gobiernos que han ocupado el Estado, al menos hasta la década de los ochenta. Estos fueron: a) La idea de crecimiento económico sostenido, y b) La garantía de que todos los sectores sociales serían partícipes de los beneficios de dicho crecimiento. Para ello, la intervención

<sup>7</sup> Daniel Levine, *Conflict and Political Change in Venezuela*, Princeton, 1973.

distributiva del Estado petrolero sería el responsable de velar porque el bienestar alcanzara a todos los grupos sociales.

Una promesa o supuesto semejante, sólo fue posible en un país como Venezuela y gracias a la estructuración de un particular Estado Benefactor. El ingreso petrolero al ser una transferencia unilateral de recursos monetarios a favor de Venezuela, se convirtió políticamente en un recurso desde el cual satisfacer la gran cantidad de las demandas que llegaban al sistema político. Esto pudo hacerlo además con el ingrediente especial de no tener que absorber de ningún grupo social los recursos para financiar la paz social.

Al ser la principal fuente de ingresos públicos de origen externo, es decir, que no dependía significativamente del tributo de ninguno de los sectores sociales nacionales, el Estado democrático gozaba de un alto nivel de discrecionalidad para determinar su uso y aplacar las demandas sociales, incluso aquéllas de carácter antagónico. El Estado venezolano no necesitó sustraer de un grupo social recursos para favorecer a otro, simplemente pudo hacer de todos "ganadores relativos" del nuevo régimen.

Así, el Estado gracias a su autonomía financiera y la magnitud de sus ingresos, podía por medio de subsidios (p.e), asegurar igualmente márgenes de ganancia atractivos de los productores de bienes y, a la vez, garantizar un precio accesible de éstos, según los niveles de ingreso, a los particulares. Del mismo modo, el propio sector público pudo hacerse cargo de gran cantidad de funciones sociales y económicas con criterios distributivos, mantuvo un conjunto de estímulos para el crecimiento económico y controló la economía cuidando de que ningún sector perdiera las posiciones alcanzadas.

La capacidad que tuvo el Estado de garantizar un sistema administrado de distribución de los ingresos, que hiciera a todos los grupos sociales ganadores dentro del orden democrático, fue una condición más que suficiente para que se mantuvieran lazos de lealtad utilitaria al sistema. Múltiples evidencias del "Estado paternalista o benefactor" o del "sistema clientelar" de los partidos políticos, pueden encontrarse en la forma como se distribuía el gasto público o se diseñaban las políticas públicas en Venezuela.

Mientras el Estado pudo mantener la estrategia distributiva, antes que re-distributiva, la acción racional de distribuir la renta petrolera en atención a modernizar el país y a la vez controlar en niveles tolerantes el conflicto social, será la forma privilegiada de actuar del Estado y, además, forma ésta apoyada y legitimada por el resto de la sociedad como beneficiaria del esquema distributivo del Estado petrolero.

No obstante, el alto grado de funcionalidad que representó para la democracia el establecimiento de un comportamiento del sector público que no daba lugar a "perdedores" sino, en todo caso a "ganadores desiguales", en favor de la paz social, alcanza su techo cuando el crecimiento de las demandas de una sociedad cada vez más heterogénea rebasaron la disponibilidad de recursos económicos —especialmente los provenientes

del petróleo— y de los medios políticos para satisfacer, posponer, matizar o reformular dichas demandas.

El mismo proyecto de modernización democrática, fundamentado en la renta petrolera, mientras pudo mantener conforme a la mayoría de los distintos sectores sociales, no se orientó hacia la creación de las condiciones para su viabilidad posterior —es decir, la búsqueda del equilibrio entre las demandas y los recursos, más allá del petróleo—. De esta forma cuando el patrón distributivo rentista se vio desbordado por la multiplicación de actores demandantes, y al no haberse institucionalizado formas de canalización y contención de dichas demandas, sobreviene la crisis y los obligados reacomodados para la confección de un *nuevo paradigma de desarrollo social y económico*.

Según lo anterior, la crisis del sistema democrático venezolano, y en particular de la capacidad de contener o manejar los conflictos por medio de la distribución de la renta petrolera, tenía un techo. La "Democracia Feliz" donde no existían perdedores, tenía un límite a futuro. Incluso, independiente de si los ingresos petroleros no se hubiesen venido abajo —tras la crisis en los precios a comienzos de los años ochenta—, el aumento exponencial de las demandas por el aumento de la heterogeneidad social, propio de todo proceso modernizador, rebasaría a los recursos petroleros, como atenuador de los conflictos, si no se diseñaban otros medios para regular políticamente por medios pacíficos a las demandas sociales<sup>8</sup>.

No obstante la realidad de la caída de la renta petrolera y, con ella, la capacidad de usarse para contener los conflictos —primero a causa del problema de la deuda externa y luego con el declive en los precios del barril—, acelerará la crisis precipitándose con ella la continuidad de las dos promesas o supuestos que sirvieron de base de sustentación inicial al sistema democrático venezolano: el crecimiento económico sin límites, y el disfrute progresivo de todos los grupos sociales de ese crecimiento, gracias al Estado petrolero.

### *Sueño, Despertar y Realidad*

Desde finales de los años sesenta era claro que el sistema económico sostenido por el petróleo se aproximaba a un "callejón sin salida". Una economía abierta a las importaciones y cerrada a las exportaciones —a excepción del petróleo, claro está—, diseñada así por el mantenimiento de muchos mecanismos indirectos de distribución de

<sup>8</sup> El proceso de *regulación de las demandas políticas*, sus dificultades y límites, en un sistema político abierto (democrático) que las exponencia legítimamente, es la paradoja que comúnmente se conoce con el nombre de "Ingovernabilidad de la Democracia". Sobre este tema puede consultarse, entre otros, a Norberto Bobbio, *El futuro de la Democracia*, FCE, México, 1987.

la renta petrolera, como lo era la sobrevaluación de la moneda nacional; llevaba a la desinversión, la baja productividad de las actividades internas y la salida de capitales<sup>9</sup>.

Esa situación, claramente visible antes del "boom petrolero" de mediados de los setenta, ya formaba parte del discurso político venezolano desde el mismo momento en que los ingresos petroleros se habían convertido en el motor de las fuerzas económicas en los años cuarenta<sup>10</sup>. "La Siembra del Petróleo" se había convertido en una pieza de la retórica nacional sin que ningún sector del país se decidiera a formular un proyecto nacional distinto al confeccionado tras la muerte de J.V. Gómez y reformulado con el inicio de la democracia. Estaba claro, tal y como lo demostró la crisis de los ochenta, que "el sueño petrolero" seguiría hasta que éste fuera insostenible.

Lo que pudo precipitarse en los años setenta no ocurrió gracias a la multiplicación por cuatro de los precios del barril de petróleo en el último trimestre de 1973. El aumento espectacular de los ingresos por exportaciones de petróleo le permitió al sistema profundizar la forma como se distribuía la renta petrolera como atenuador de las demandas sociales, en su vertiente política, y fortalecer la inversión privada y la pública, por el lado económico. Esta última por medio del desarrollo de ambiciosos proyectos en las industrias básicas, las cuales se presentaban como la base de superación del petróleo.

Toda la preocupación del sistema por programar su futura viabilidad se concentró, entonces, en la esfera económica. La idea según la cual "la locomotora económica era la que empujaba el resto de los vagones políticos y sociales", se reforzó con la inundación de recursos petroleros.

Sin embargo, la discrecionalidad del Estado petrolero había introducido una serie de procedimientos políticos que atentaban contra la viabilidad del mismo, al reducirse dicho ingreso. La posibilidad de resolver los conflictos por la vía de la "gratificación indiscriminada", hizo que el sistema político tendiera a cerrarse, a que las decisiones fueran cada vez más acuerdos de élites, que los mecanismos de representación se deterioraran, que los partidos políticos cada vez más se convirtieran en élites desvinculadas de las bases y que el poder se concentrara. Dado que el ingreso del Estado parecía poder desmovilizar las demandas de cualquier sector, la experiencia democrática sólo parecía realizarse una vez cada quinquenio y en base a un sistema electoral donde la figura del candidato presidencial ocultaba a varios cientos de "representantes partidistas"<sup>11</sup>.

Cuando sobrevino la crisis de 1983, provocada por la negativa de la banca internacional a seguir otorgando créditos al país, se produjo un descenso en los ingresos disponibles por el Estado. Esto, junto a un crecimiento económico negativo que se venía

<sup>9</sup> Ver, Juan Pablo Pérez Alfonso, *Petróleo y Dependencia*, Caracas, 1971.

<sup>10</sup> Ver, Arturo Uslar Pietri, *De una a Otra Venezuela*, Caracas, 1988.

<sup>11</sup> Luis P. España, *Democracia y Renta Petrolera*, Caracas, 1988.

experimentando desde 1979, hizo que por segunda vez en los años de la democracia se devaluara la moneda, la inflación creciera a la cifra histórica de dos dígitos y el gasto del Estado dejara de ser lo opulento del pasado.

Tres años después, en 1986, los precios del petróleo descienden hasta los 10\$ por barril, cuando éste había llegado a representar, para la canasta venezolana, los 34\$ en 1981, profundizándose la crisis iniciada en 1983. Ya que la crisis del petróleo fue posterior a la crisis económica —propiamente dicha—, esto mostraba que las dificultades económicas pasaban a ser un problema enteramente estructural, que sobrepasaba las fluctuaciones de precios en el mercado internacional, para dejar en claro que el modelo económico, y con él, el proyecto mismo de sociedad, había alcanzado su techo.

Con la baja en los ingresos, "se destapa" el resto de los límites no superados por la democracia tras casi treinta años de existencia. El sistema político mostraba su intolerancia, su incapacidad para resolver los conflictos por vías distintas de la atención rentista a las demandas de los grupos sociales con poder político, la disidencia como elemento distintivo de la democracia no tenía cabida dentro de las cerradas instancias de acuerdo, el desprestigio y la poca credibilidad hacia las instituciones se apoderó del sentimiento común de los ciudadanos, expresándose por medio de la abstención electoral más alta registrada en Venezuela en las elecciones de 1988, y luego superada en la elecciones municipales de 1989.

Por el lado social, el panorama era mucho más crítico. El salario real comenzó a descender abruptamente desde 1981 hasta representar hoy niveles por debajo a los de 1968<sup>12</sup>, la pobreza se incrementó por encima del 70% de la población y, lo más importante, las expectativas de ascenso social dejaron de ser parte de la cotidianidad del venezolano.

Frente al deterioro social, no había una infraestructura estatal capaz de compensar y garantizar la prestación de servicios sociales, más allá de las prácticas clientelares o el control estatal sobre los precios de los bienes básicos. La salud, la educación, los servicios públicos, se deterioraron al mismo ritmo en que los ingresos del Estado hacían descender el gasto público siempre creciente de otros años.

La crisis, pues, dejaba de ser económica para mostrar sus vertientes políticas y sociales, lo cual implicaba su globalización. La fase final del despertar ha sido la crisis manifiesta de estabilidad tras el intento de golpe de Estado.

---

<sup>12</sup> Banco Central de Venezuela, *Anuario de Cuentas Nacionales*, Caracas, Varios Años y Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), *Encuestas de Hogares por Muestreo*, Caracas, Varios años.

## *El redescubrir de la violencia*

Un panorama como el descrito puede identificarse como parte de las condiciones suficientes para que el orden social y político hicieran eclosión. La posibilidad de que la crisis terminara con la continuidad democrática, podía ser una alternativa planteada para el cambio brusco que representó el fin del auge rentístico y el necesario cambio hacia un nuevo proyecto nacional distinto al amparado en la renta petrolera.

De esta forma si la crisis tiene por desenlace el fin de la democracia, lo mucho que había avanzado el país en favor de minimizar los saldos de violencia, y de reducirla aún más, desde la propia posibilidad democrática de mejorarla, se convertiría en un retroceso real de lo alcanzado por el evidente incremento de la violencia, en todas las formas pensables.

Para que la crisis económica terminara comprometiendo la estabilidad de la democracia se requerirá, igualmente, de condicionantes políticos necesarios y suficientes para cortar el hilo constitucional.

Sin embargo, sólo un determinismo simplista puede plantear que el grado de bienestar se transfiera directamente al grado de democratización de una sociedad. Muy por el contrario, la propia experiencia venezolana había mostrado que cuanto más bonanza petrolera hubo, el espacio para el disenso fue menor y, con ello, los canales de acceso a la toma de decisiones.

La condición fundamental para que un sistema político vea comprometida su continuidad es que existan opositores desleales al orden establecido. Los opositores desleales son aquellos grupos políticos cuyo objetivo de sus acciones es el trastocamiento de las reglas de juego político impuestas por el sistema. Mientras éstos no aparezcan el descontento popular o los conflictos originados desde la esfera económica (p.e) no transitarán o se dotarán de contenidos políticos que comprometan la estabilidad del orden.

Incluso, aún existiendo dichos opositores, sólo si logran canalizar el malestar de los principales grupos de poder en dirección al "objetivo desleal", es decir, si la oposición desleal es percibida como la solución a los problemas —sea ello cierto o no—, es que la desestabilización del orden alcanza un alto grado de probabilidad.

Para las democracias, los opositores desleales, que han logrado desestabilizar al sistema —hasta ahora— no provienen de las masas, sino de las élites. Ninguna democracia ha caído a manos de una revolución popular. Las democracias caen, más bien, por élites aliadas a las Fuerzas Armadas<sup>13</sup>. En todo caso, las élites conservadoras,

<sup>13</sup> Juan Linz, *El Quiebre de la Democracia*, Madrid, 1987.

lo que hacen es alertar a los militares para que actúen restableciendo el orden o actuando como "la pauta moderadora" de gobiernos democráticos que no logran mantener el monopolio estatal de la violencia o no dan muestras de manejar situaciones de crisis prolongada.

Para el caso de Venezuela, el opositor desleal con posibilidades de tomar el poder tomó la forma de un sector de las Fuerzas Armadas, que aparentemente sin vinculación comprobada con algún sector civil políticamente organizado, protagonizó la crisis de estabilidad del 4 de Febrero pasado. A partir de este momento la inicial crisis económica, seguida de sus evidencias sociales y políticas, terminó convirtiéndose en una crisis de estabilidad, que puede significar aumento de la violencia política con el fin de mantener al sistema o para quebrarlo definitivamente.

El intento de golpe militar, sus hechos y posibles consecuencias, han sido analizados —hasta donde es posible a la fecha— por diversos autores<sup>14</sup>. En términos de las posibilidades de desenlace futuro los escenarios en modo alguno descartan el crecimiento de la violencia política en Venezuela.

La evidencia de subversión dentro de las Fuerzas Armadas es un dato que muestra el potencial desencadenamiento de violencia política en Venezuela. No obstante, adicionalmente a ésta, hay otros indicadores que muestran un cambio de tendencia en el uso mismo de la violencia como instrumento de lucha política.

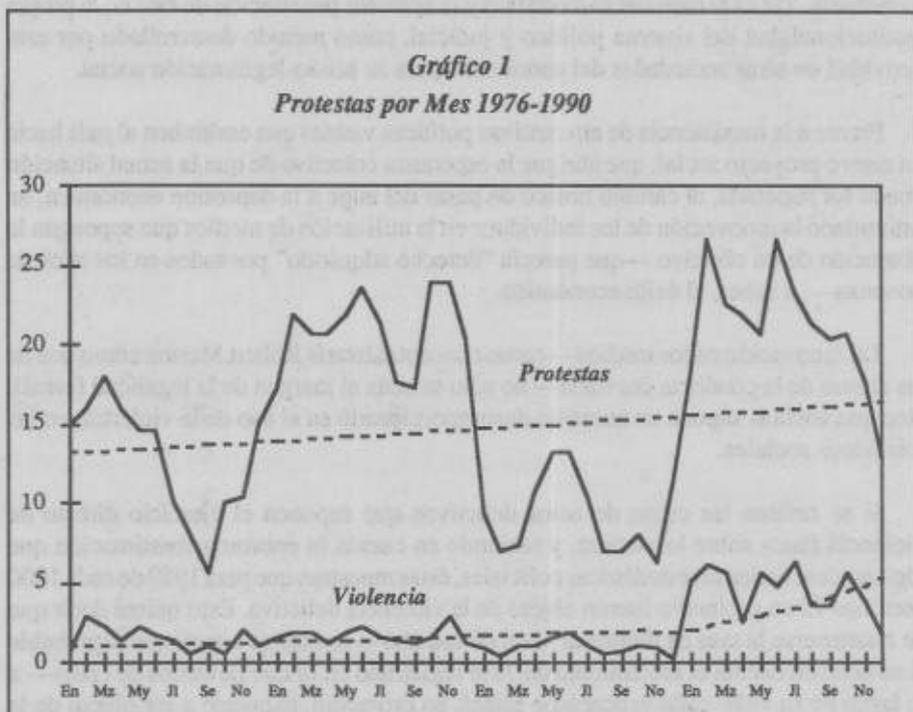
Las protestas y movilizaciones de masas, como medio aceptado por regímenes democráticos para hacer llegar las demandas a los centros decisores, pueden desembocar en situaciones de violencia —represiva, subversiva o espontánea— que muestran la incorrespondencia en el monto de demandas y los canales institucionales dispuestos por el sistema para atenderlas, sintetizarlas, posponerlas o rechazarlas.

En los últimos años parece registrarse un incremento importante en la proporción de la violencia en las protestas callejeras. Según el gráfico 1, si bien el número de protestas que se han registrado en el país en una muestra de años que va de 1976 a 1990, parece mantener una tendencia "normal" para lo que éstas han sido históricamente, éste no ha sido el caso del número de ellas que supusieron el uso de la violencia. Mientras que en 1976, aproximadamente el 10% de las protestas implicaron violencia directa de algún tipo, en 1990 dicha proporción se duplicó, rompiéndose así la participación de la violencia en dichas movilizaciones.

Si bien no disponemos de datos más recientes, cabe suponer que el mayor uso de la violencia no debe haber disminuido y que en la medida en que el deterioro del sistema

<sup>14</sup> Luis P. España, María G. Ponce y Néstor L. Luengo, *Amaneció de Golpe. El Intento de Derrocar al Presidente Pérez*, IIES-UCAB, Caracas, 1982.

político, la pérdida de credibilidad y la disminución de la legitimidad conferida a esta democracia se acentúa, de igual forma el recurrir a la violencia es una alternativa a la que optarían cada vez más grupos disidentes, hasta llegar a los intentos de golpe de Estado.



Fuente: Base de Datos de "Registro de Conflictos", IIES - UCAB, -Prensa Nacional, Diaria

El resurgimiento de la violencia política en Venezuela, si bien no ha adoptado la forma clásica de lucha armada y no se ve posibilidad de que ésta se reactive sustancialmente, es un dato que debe ser acompañado del aumento de la violencia social.

Más allá de la violencia implícita o indirecta que se deriva de la pobreza y de las limitadas posibilidades que hoy tienen la mayor parte de los venezolanos para alcanzar los objetivos que socialmente han sido interiorizados; en Venezuela se ha desatado una violencia social directa, desorganizada y sin ningún otro objetivo que la obtención de algún beneficio por parte de quien la ejerce. Una violencia directa caracterizada por la delincuencia, la autodefensa, el aprovechamiento de quien se encuentra en desventaja, la pugna por invadir los derechos del otro, el sistema de complicidades, la impunidad y el estado de indefensión en el cual se encuentra el ciudadano común, dado el deterioro—entre otras causas— del sistema judicial venezolano.

Por otra parte, y en el mismo marco de lo anterior, la profundización de las tendencias delictivas y el incremento de las relaciones sociales violentas entre los ciudadanos, también ha dado paso a la aparición de problemas que parecían controlados en Venezuela. Tal es el caso del narcotráfico y la aparente penetración de éste en la propia institucionalidad del sistema político y judicial, como método desarrollado por esta actividad en otras sociedades del continente, para su pseudo-legitimación social.

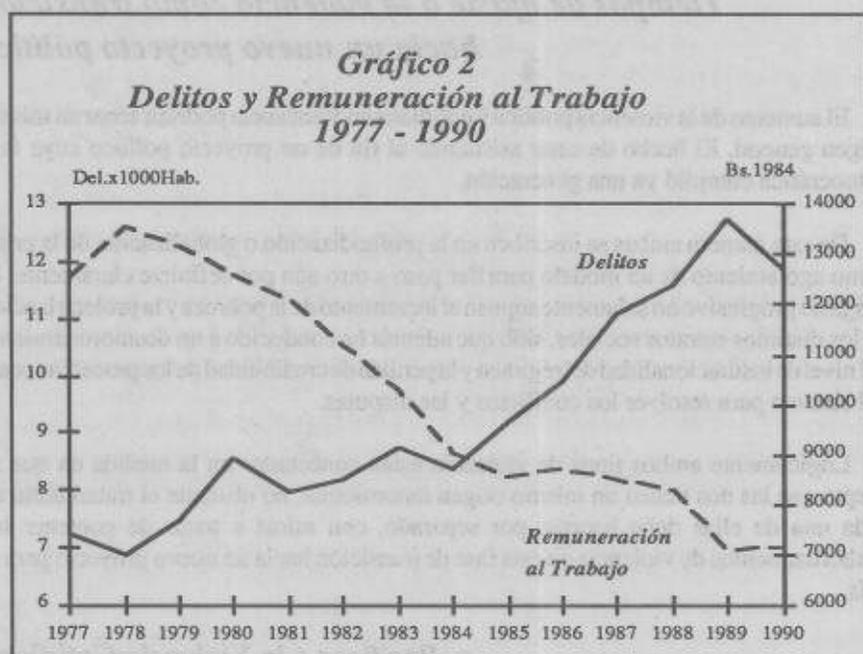
Frente a la inexistencia de alternativas políticas viables que enrumben al país hacia un nuevo proyecto social, que abrigue la esperanza colectiva de que la actual situación puede ser superada, el cambio brusco de pasar del auge a la depresión económica, ha estimulado la innovación de los individuos en la utilización de medios que supongan la obtención de un objetivo —que parecía “derecho adquirido” por todos en los años de bonanza—, a saber, el éxito económico.

Tal innovación en los medios —como conceptualizaría Robert Merton como una de las causas de la conducta desviada— no sólo se sitúa al margen de la legalidad formal, sino que además supone un aumento desproporcionado en el uso de la violencia en las relaciones sociales.

Si se revisan las cifras de actos delictivos que suponen el ejercicio directo de violencia física sobre la víctima, y teniendo en cuenta la enorme subestimación que lógicamente tienen las estadísticas policiales, éstas muestran que para 1989 de cada 1000 personas 13 en promedio fueron objeto de la violencia delictiva. Esto quiere decir que de mantenerse la tasa de delitos al nivel de ese año —lo cual es altamente improbable si se tiene en cuenta el crecimiento de 71% registrado en lo que llevamos de crisis— a lo largo de su vida cada venezolano estará, en promedio, expuesto a ser objeto de la violencia delictiva al menos una vez, promedio éste que se incrementa según el grupo etario, el nivel de ingresos, el lugar de residencia, etc.<sup>15</sup>.

Sin ánimos de establecer relaciones mecánicas entre variables sociales multicausales como lo es el caso de la delincuencia, llama la atención la estrecha relación entre la tasa de delitos por 1000 hab. y el deterioro de las remuneraciones al trabajo en los últimos años (Gráfico 2). Esto en alguna medida ilustra cómo la sociedad venezolana se ha hecho más violenta delictivamente, en proporción similar al deterioro, al menos, del ingreso.

<sup>15</sup> OCEI, *Anuario Estadístico de Venezuela*, Caracas, Varios.



Fuente: BCV, Informes Anuales, 1977-1990 OCEI, Anuarios Estadísticos, 1977-1990.

La expresión masificada de la violencia social desorganizada y sin objetivos colectivos —a diferencia de la violencia política, que tiene características de mayor organicidad y selectividad—, y que hoy constituye la forma más evidente de violencia directa en Venezuela, puede representarse en lo que fueron los acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989, y que hoy, dada la fuerte represión que se desató en función de regresar al orden, se muestra en el desenfreno delictivo individual. Así, al analizarse las causas que provocaron esa “explosión social”, las de tipo inmediatas se refieren a las motivaciones individuales y personales, y sólo en el fondo son identificables contenidos estructurales de orden socio-político.

Si bien el crecimiento alarmante de la violencia cotidiana en Venezuela —como expresión que abarca la de tipo delictivo, sus reacciones y otras muchas menos explícitas como el ventajismo y la corrupción— tiene por origen la globalización de la crisis económica en el país y el cambio relativo que supuso ésta dada la inmediatez previa del auge, probablemente reducir la violencia a lo que habían sido sus niveles “normales” pasa por la resolución de los problemas macrosociales que la originaron. En ese sentido, el umbral policial o represivo del Estado en modo alguno constituye el límite, o la acción privilegiada, de la nueva pacificación en Venezuela.

## *Tiempos de ajuste o la violencia como transición hacia un nuevo proyecto político*

El aumento de la violencia política y cotidiana en Venezuela podrían tener un mismo origen general. El hecho de estar asistiendo al fin de un proyecto político cuya fase democrática cumplió ya una generación.

De esta manera ambas se inscriben en la profundización o globalización de la crisis como agotamiento de un modelo para dar paso a otro aún por definirse claramente. El desgaste progresivo no solamente supuso el incremento de la pobreza y la proletarianización de los distintos estratos sociales, sino que además ha conducido a un desmoronamiento del nivel de institucionalidad del régimen y la pérdida de credibilidad de los procedimientos del sistema para resolver los conflictos y las disputas.

Lógicamente ambos tipos de violencia están conectados en la medida en que se acepte que las dos tienen un mismo origen macrosocial, no obstante el tratamiento de cada una de ellas debe hacerse por separado, con miras a tratar de contener los desbordamientos de violencia en esta fase de transición hacia un nuevo proyecto para el país.

### **a. Pacificar a la Violencia Cotidiana**

No representa ninguna innovación en las ciencias sociales establecer relaciones de causalidad entre pobreza y violencia cotidiana. Si bien la constatación resulta evidente, ésta puede conducir a dos posiciones extremas como orientación para la resolución del problema.

Una supone que sólo actuando sobre la base misma del problema es que se puede combatir la violencia delictiva. Esto implica que sólo desterrando la pobreza como realidad social es que se dan pasos sustantivos en la superación de la violencia callejera. Tal perspectiva, además de ser una reducción de los otros condicionantes que intervienen en la violencia, implica paralizar a la sociedad en su conjunto y a las instituciones públicas en particular, a la espera de que ocurra una reconstrucción de la sociedad más allá de lo previsible.

La otra perspectiva, ubica en el ámbito de la represión y en el incremento del control social policial, la salida para la violencia. Tal efectismo corto placista supondría la militarización de la sociedad, pudiéndose incrementar de esta forma, la violencia que se quiere combatir, con la que proviene de extremar el control social, como profilaxia o como represión. Por otra parte, ésta acción no corregiría en nada la violencia cotidiana que proviene del ventajismo y la invasión de los derechos del otro con el fin de obtener beneficios.

No hay dudas de que el Estado debe mantener el monopolio de la violencia, sea ésta para enfrentar amenazas políticas o para evitar que los privados ejerzan su propia defensa. De lo contrario, tanto en uno como en otro caso, el orden se verá comprometido, traduciéndose en consecuencias impredecibles. Según esto, en las condiciones actuales de Venezuela, el Estado debe aumentar la protección de las personas y la de sus derechos, con el fin de evitar que la violencia se siga privatizando, o que el orden institucional se siga evadiendo como forma individual de defender los propios derechos.

En modo alguno la defensa al atropello de los derechos o la protección propia frente a la delincuencia, puede consistir en la obtención de privilegios o en la construcción de "bunkers" privados, respectivamente. La pacificación de Venezuela debe estar, a nivel micro, en que el Estado garantice la seguridad pública, ejerciendo el monopolio de la violencia legítima. Pero paralelamente se debe actuar en las causales de fondo, de lo contrario el Estado se convertiría en un instrumento de coacción. Nada más lejano del principio del Estado democrático.

Así, en el largo plazo, la superación de la violencia cotidiana —o al menos su reducción a niveles tolerables— requiere la reivindicación de las promesas de la democracia, para que colectivamente se reexperimente la posibilidad de un futuro mejor, y del fortalecimiento de su institucionalidad para impedir que los privilegios sigan siendo la forma de defenderse y de atacar.

Si el país no encuentra salida a sus problemas sociales y políticos, por mucho dinamismo que se experimente en el área económica, esto no se va a transferir automáticamente haciendo de Venezuela un país más democrático y más igualitario en sus condiciones sociales. Esto nos lleva a la consideración del segundo tipo de violencia aquí señalado.

## **b. Pacificar en las Relaciones Políticas**

El desarrollo económico no es la base de la democratización, y sobre esto hay ejemplos notables en el resto de América Latina, como fue el caso brasileño y hasta hace poco el chileno. De igual forma, la mejor política social tampoco es el crecimiento económico si no hay garantías de que éste se transfiera a los distintos sectores sociales.

Sin embargo, en Venezuela, los problemas sociales y políticos que enfrentamos, no parecen tener visos de solución. Por el lado social, la pérdida de capacidad del Estado benefactor por resolver, compensar o atenuar los males sociales, aún no ha podido superar las trabas estructurales que se habían "ocultado" gracias a la renta petrolera.

Por el lado político, cada vez más el deterioro institucional, lejos de superarse, claramente se ha profundizado tras el intento de derrocamiento del presidente de la República y el desfile de desaciertos en los que han incurrido los principales líderes y

organizaciones del sistema en los meses siguientes al fallido golpe <sup>16</sup>.

La pérdida de institucionalidad del sistema y de la eficacia de los canales democráticos para resolver los conflictos, está llevando a que las fuerzas sociales se enfrenten "desnudamente" desde sus propios atributos de poder. Los políticos desprestigiándose mutuamente, los estudiantes manifestando, los empresarios sobornando, los asalariados en huelgas, la policía reprimiendo y los militares golpeando.

Esa actuación desinstitucionalizada de las fuerzas sociales, es lo que conspira contra el mantenimiento de relaciones no-violentas en una democracia y contra el propio sistema, lo que puede llevar directamente al autoritarismo, incluso sin interrumpir el hilo constitucional, mucho más en caso de que definitivamente ocurra un quiebre.

Por lo anterior, la atención de los problemas sociales y la recuperación por parte del sistema de la institucionalidad perdida, son las bases de la pacificación política del país. La probabilidad de que esto ocurra entra ya en el campo de la especulación.

Por lo dicho hasta aquí, la transición —o ajuste si se ve en el corto plazo— parece estar bajo el signo de incrementos muy importantes en nuestros niveles sociales y políticos de violencia. Aún bajo tal denominador común podrían *imaginarse* escenarios futuros de descenlace, los cuales antes que tratar de disponer de algún grado probabilístico de predicción, pretenden únicamente advertir sobre la posibilidad de convertimos en un país violento como alguna vez lo fuimos en el pasado, aunque claro está, bajo las nuevas condiciones de hoy.

Bajo una hipótesis optimista, del desarrollo de lo que hasta aquí hemos planteado, podría pensarse que el incremento de la violencia cotidiana y política, forma parte del proceso de ajuste que está viviendo el país post-rentista. En otras palabras, es el tiempo necesario para la transición hacia un proyecto social más viable para el país, lo que limita temporalmente el crecimiento de la violencia en Venezuela.

La construcción de un nuevo paradigma de desarrollo, que suplante al que se formuló en el segundo tercio de este siglo, va acompañado por algún tiempo (imposible de prever) de esta violencia desarticulada y sin objetivo estructural que hoy padecen los venezolanos, junto a la amenaza de la inestabilidad —cercana a la anarquía— pero sin que alcance a quebrar el hilo constitucional.

---

<sup>16</sup> Para mayores datos remito a una colección de artículos aparecidos en la revista SIC del mes de Abril de 1992.

Sin embargo, habría una segunda hipótesis, más pesimista y que de concretarse sería la involución de los avances que había alcanzado la sociedad venezolana en favor de la paz, y es que, no lográndose superar la crisis social y política del país, esta violencia desorganizada adquiriera dimensiones de caos social, haciéndose inmanejable desde un régimen democrático, lo cual estimule una salida de fuerza.

En este momento sería aventurado pronunciarse por algunas de las dos hipótesis generales. Ello se debe a que quizás el tiempo de transición sea aún muy corto para poder divisar el final del proceso actual del país.

En todo caso, puede que ayude en el logro de una salida democrática, y por tanto menos violenta, el hecho de que en la gran mayoría de los venezolanos persiste una *cultura de paz* que se expresa en la forma "negociada" como se resuelven muchos de los conflictos que en otros países sólo conocen la resolución violenta. Sino ¿cómo explicar la pronta capitulación de los importantes regimientos alzados el 4 de febrero, cuando ciertamente pudieron haber resistido días en un enfrentamiento entre fracciones del ejército?